



**Elecciones y Procesos de Cooptación de Institucionalidad pública en
Colombia: Entre la Fragmentación y la Impotencia.
El Caso paramilitar: Nuevos Actores de poder, región y territorio.**

Laura Bonilla

Politóloga

Observatorio Político – Electoral

Corporación Nuevo Arco Iris

Abstract:

Este documento presenta un panorama inicialmente descriptivo de la relación entre el conflicto armado en Colombia – particularmente los actores del conflicto armado interno – y los procesos electorales a partir de mediados de la década del 90. Explora las dinámicas de esta situación desde una perspectiva básicamente relacional entre variables que han sido suficientemente estudiadas como lo son la violencia política, y variables que no han tenido tanto desarrollo como son los resultados electorales a nivel territorial.

Tomando contribuciones de estudios nacionales sobre los comportamientos de la violencia política, misiones y observaciones internacionales en torno a los procesos electorales nacionales y algunos casos locales, y realizando una exploración detallada en el fragmentado sistema colombiano de partidos, se busca iniciar una exploración en la manera en la cual los actores armados del conflicto –para el caso concreto del documento los grupos paramilitares – ejercen control hegemónico descentralizado sobre las poblaciones, sustituyendo por la vía de la ingerencia directa o indirecta en elecciones locales, regionales y nacionales la relación básica ciudadano – estado, convirtiéndola en una relación del ámbito de lo privado.

El centro analítico del documento se ubica en la tensión entre un régimen democrático nacional que durante décadas mantuvo invisible las relaciones entre política y grupos de poder alrededor del conflicto armado, y una serie de territorios y partidos políticos de corte regional que han desarrollado procesos electorales en el marco de una descentralización económica, un concentración política del poder en las regiones, y una saga de violencia política que modificó la historia política nacional con resultados dolorosos para la vida democrática del país.



Elecciones y Procesos de Cooptación de Institucionalidad pública en Colombia: Entre la Fragmentación y la Impotencia.

1. Nuestro universo no es local.¹

Asistimos, tal vez sin habernos percatado suficientemente, a una serie de cambios acelerados en los escenarios públicos, estatales o no. Una definición habermasiana de lo público muestra que es el lugar común donde en un momento dado de la historia algo se hace merecedor de ser visto y oído por un “todos” específico. Desde esa perspectiva, la reconfiguración actual de lo público es una situación relacional entre actores que definen las priorizaciones de visibilización u ocultamiento de un hecho histórico, un proceso, un suceso, etc... En este proceso, los códigos de acceso a los escenarios son determinados por los mismos actores. En Colombia el caso es un tanto divergente, por cuanto una mirada a la política nacional revela que la distribución territorial tanto de las instituciones, como de las prácticas y los procesos institucionales son profundamente desiguales, incluso al interior del mismo estado.

Por otra parte, el conflicto armado interno ha tenido ingerencia durante décadas en la relación ciudadano – estado, en la creación y desarrollo de marginalidades en la vida política nacional, o en la perpetración de las ya existentes. La relación

¹ Brian Greene, *The Fabric of the Cosmos* (2004:81). Citado por Edward L. Gibson; En: *Autoritarismo Subnacional: Estrategias Territoriales de Control Político en Regímenes Democráticos*; Traducido por Alexandra Abello Romero. Profesora y Joven Investigadora de las Facultades de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.



de actores que construyen lo público cambia al presentarse una serie de actores con intereses no unívocos, que buscan –en general – el acceso a la esfera pública y al poder político, desde lógicas privadas que se confunden en una compleja relación de intereses y poderes².

Las hibridaciones de actores del conflicto armado con las instituciones locales y nacionales, la lógica privada del narcotráfico y su fuerte ingerencia en los territorios, las mafias locales y regionales que adaptaron estructuras armadas, y el aumento de las cifras de la llamada “violencia común” y su relación no muy clara con la denominada “violencia política”³, desterritorializan los comportamientos de la violencia de lo que hasta el momento habían sido lugares comunes, tanto para analistas y expertos en el tema de conflicto, como para la opinión pública en general.

De esta manera, no resulta ya tan sencilla la premisa que mantenía los procesos electorales nacionales propios de un régimen democrático aparentemente estable, aislados de la dinámica propia del conflicto armado interno, que se representaba en regímenes autoritarios regionales que interactúan y construyen el panorama nacional.

Aunque podría asegurarse que el conflicto armado abarca casi la totalidad del territorio nacional, que en todas las regiones del país existe incidencia (mayor o menor) de los distintos grupos armados, si se mira con mayor detenimiento, la ubicación geográfica del conflicto le atribuye una fisonomía propia, así como caracteriza el accionar de los actores armados de acuerdo al territorio o región de

² No quiere decir esto que el interés de todos y cada uno de los actores del conflicto armado en Colombia sea el acceso a la esfera pública. Se trata de ubicar en esta perspectiva un objeto común en la presencia territorial de actores, entendiendo lo público no como lo exclusivamente estatal, pero sí como la relación que media entre una serie de instituciones consuetudinariamente arraigadas y la población.

³ Las denominaciones de “violencia común” y “violencia política” se realizaban hasta hace un tiempo, a partir del criterio del actor que la ejercía. Para el caso de la “violencia política” se hacía mención a aquella violencia ejercida por actores organizados con estructuras de mando en alguna medida unificadas, obedeciendo a un móvil político. Esta violencia se ubicaba en la esfera pública, mientras la “violencia común” proveniente de actores no organizados y compuesta de todos aquellos hechos de violencia sin un móvil político aparente, se destinaba a la esfera privada. La primera confusión entre estas dos violencias inició en la década de los 80’s con la escalada del narcotráfico que hizo pública una serie de hechos que hasta entonces se consideraban parte de la esfera privada.



incidencia, presencia o permanencia. El desplazamiento y despliegue de los actores armados en el territorio se encuentra profundamente imbricado con la geografía física, política y económica del territorio⁴.

Los análisis de los sistemas políticos y la realización en zonas de alto riesgo de procesos electorales democráticos se encuentra con una situación favorable a la captación por parte del actor armado hegemónico, de una parte fundamental del aparato de estado, que no obstante, no es perceptible como tal al interior de la región. De esta manera, Mientras que lo particular comienza a ser representación pública de dominio, lo común es lo excluido de derechos particulares. Alrededor de esto, la esfera del poder público se ubica en el estado, en el ámbito de policía, mientras que el ámbito privado determina ya inclusive las esferas del poder público.

A partir de estas consideraciones, un tema adquiere relevancia en el contexto inmediato: la relación existente entre grupos paramilitares y elecciones tanto nacionales, como regionales, que se expresa en la construcción de una relación entre un ciudadano – despojado de derechos políticos en lo local y lo regional – y unas instituciones estatales que determinan no sólo la vida política regional, sino también la económica y social, al margen de la construcción de una esfera pública transparente.

Por otra parte, una institucionalidad invisible y consuetudinaria se abre paso en las regiones; la relación entre la población y el gobierno nacional se distancia profundamente de la relación con gobiernos locales que han llegado a ocupar tales cargos mediante la alianza legalidad – ilegalidad, – violencia política – prácticas tradicionales y clientelares. La fragmentación y multiplicidad de partidos políticos en las regiones⁵ impiden la transformación de esta relación y el

⁴ Ver: GONZALEZ, Fernán; *Evolución Territorial del conflicto armado y Construcción del Estado en Colombia*. CINEP. Bogotá, 2002.

⁵ La reforma política del 2003, logró reducir el panorama de 89 partidos registrados con personería jurídica, a 21 partidos que pueden tener una incidencia importante en las elecciones regionales del 2007. No obstante, la mayor parte de estos partidos políticos siguen siendo instituciones inestables, frágiles y susceptibles de alianzas con actores armados hegemónicos en las regiones, para conservar élites tradicionales en el poder político, o bien abrirle espacio a una clase emergente que pugna por el acceso al poder político regional. En este panorama, todo tipo de alianzas son posibles mientras persista la desinstitucionalización de los partidos políticos a nivel regional y local – y en algunos casos particulares – a nivel nacional.



blindaje de los procesos electorales frente a las mafias narcotraficantes, el paramilitarismo – máxime posterior a la desmovilización de las estructuras de las AUC, e incluso las FARC en las zonas en las cuales la intervención en procesos electorales ha favorecido la abstención.

El caso de la ingerencia paramilitar en los procesos electorales salió a la luz pública en el marco de la negociación gobierno nacional – AUC. Las declaraciones de integrantes del Estado Mayor Negociador de las AUC fueron contundentes en este sentido.

“Ernesto Baéz” habló de realizar una consulta popular “acerca de la suerte que nos merecemos” y luego de pedir perdón a las víctimas de las acciones de las AUC, insistió que esta agrupación participará abiertamente en política:

“Nosotros (las AUC) no desaparecemos. Las autodefensas se transforman: seremos un gran movimiento, un movimiento que exige participar en las grandes decisiones de la nación”.⁶

Vicente Castaño hizo la declaración tal vez más contundente, incluso que la aseveración de Salvatore Mancuso de tener un 35% de amigos de las AUC en el Congreso de la República:

“Hay una amistad con los políticos en las zonas en donde operamos. Hay relaciones directas entre los comandantes y los políticos y se forman alianzas que son innegables. Las autodefensas les dan consejos a muchos de ellos y hay comandantes que tienen sus amigos candidatos a las corporaciones y a las alcaldías.”⁷

⁶ Ver “La cúpula paramilitar reiteró este sábado sus intenciones de participar abiertamente en política” en *El Tiempo*, Septiembre 3 de 2005.

⁷ Ver “Habla Vicente Castaño”, *Revista Semana*, No. 1205, junio 8 de 2005.



Independientemente de la multiplicidad de lecturas que puedan presentarse en el tema, es urgente y necesario el esfuerzo de avizorar los escenarios futuros, teniendo en cuenta que el proceso mantiene una constante de escándalos públicos alrededor del ejercicio del sufragio en las regiones de incidencia paramilitar.

Las cifras de violaciones a los derechos humanos y su ubicación territorial son una variable para medir niveles de incidencia violenta; pero los negocios, proyectos productivos y políticas públicas ejecutadas o planteadas en dichas regiones son una segunda variable importante en la determinación de actores, redes y relaciones alrededor del tema electoral. El presente documento es un acercamiento inicial a variables de este tipo, una presentación de contexto y algunos elementos de análisis que nos han permitido construir varias hipótesis al respecto. El desarrollo de una investigación exhaustiva atraviesa la necesidad de mantener un registro vigente sobre la coyuntura nacional, pero al mismo tiempo de evaluar la manera en la cual se desarrolla la democracia en Colombia, desde el fundamento mismo de la representación política.

Los procesos electorales y la incidencia paramilitar. 1997 - 2006

A pesar de los avances logrados en el país en materia de participación política, descentralización y normativas electorales, así como de su reconocida tradición de democracia electoral, las elecciones de 1997, marcan un punto en el cual los resultados de las elecciones de las diferentes circunscripciones empiezan a ser seriamente cuestionados por la ingerencia que en estos tienen los actores armados. Este tipo de cuestionamientos, si bien se han presentado a lo largo de la historia nacional y como consecuencia del conflicto armado, a partir de las elecciones del año 2000, aumentaron profundamente las denuncias al respecto, denuncias ya focalizadas en regiones y municipios. Estos escándalos mostraron a los diferentes grupos paramilitares como actores principales de los comportamientos electorales atípicos. Sumado a esto, el escándalo suscitado por declaraciones sucesivas de Salvatore Mancuso y Vicente Castaño que hablan del



control del 35% del Congreso de la República por parte de los paramilitares aún no se ha apagado y en la Corte Suprema de Justicia se adelanta una investigación al respecto⁸.

Cabe resaltar nuevamente que si bien esto no es un fenómeno nuevo dado los años de violencia que ha vivido el país y el uso que le han dado los diferentes grupos, como las FARC, el ELN y paramilitares, a su presencia armada para definir mandatarios locales y miembros a las corporaciones públicas, en los últimos años el fenómeno ha tomado grandes proporciones y ya no se limita a las autoridades locales de zonas marginales del territorio nacional o a parlamentarios aislados.

Teniendo en cuenta la actual coyuntura electoral y los cuestionamientos que existen en sectores de la opinión pública y de la clase política, elecciones para Cámara y Senado a celebrarse en marzo de 2006, por la supuesta participación de los grupos paramilitares, desmovilizados o no, en la definición de movimientos políticos, candidatos y votos en sus zonas de influencia, se hace necesario realizar un estudio detallado de sus resultados frente a esta problemática, tanto de las dos últimas justas electorales de los años 2002 y 2003 como de las próximas elecciones de 2006.

Las pasadas elecciones de los años 2002, para Congreso -senado y cámara- y las locales y regionales -concejos municipales, alcaldes, asambleas departamentales y gobernadores- de 2003, que también fueron fuertemente discutidas en algunas regiones del país, por la ingerencia de los grupos paramilitares en estas, serán el objeto de estudio de la primera parte de este proyecto. Es necesario pasar de las acusaciones y rumores, al análisis empírico de tipo local y comparativo tanto de los resultados electorales de estos comicios como de la presencia y control territorial de estos grupos en cuestión, para definir su poder político-electoral a nivel local, que les permite el afianzamiento político regional y nacional.



Elecciones 1997 – 1998

Según estadísticas oficiales, se presentaron casos de violencia paramilitar en cuatro municipios contando la capital del departamento de Antioquia.

A partir de investigaciones recientemente publicadas, se ha venido evidenciando la relación entre el fenómeno paramilitar y su expansión territorial, y los resultados electorales atípicos de los últimos comicios electorales. Particularmente el surgimiento de nuevas fuerzas políticas y la relación con la variable de violencia política, homicidios y presencias territoriales armadas por parte de las AUC, así como la aparición de votaciones extrañamente mayoritarias en regiones de influencias, candidatos únicos, detrimento de la votación de los partidos tradicionales en las regiones, son indicios que permiten establecer hipótesis que merecen ser corroboradas con un fuerte trabajo investigativo, que no incluya sólo el análisis de los resultados electorales, sino otras variables de configuración territorial y de presencia activa en las zonas de influencia, que establezcan planteamientos más claros sobre la manera en la cual las AUC configuran un proyecto político que atraviesa el territorio, pero que desemboca en la cooptación de la institucionalidad pública, y el funcionamiento del aparato administrativo público hacia intereses particulares de quienes componen la cúpula de las AUC.

Este tipo de investigación requiere ampliar los criterios de selección espacio – temporales, con el fin de involucrar herramientas de análisis comparado con la historia política nacional reciente. Es por eso que la trayectoria de los partidos políticos y los movimientos políticos, debe anudarse con los esfuerzos investigativos realizados alrededor del proceso de negociación entre el gobierno nacional y las AUC, para lograr establecer tendencias en torno a los posibles escenarios futuros nacionales, a la consolidación política del paramilitarismo en Colombia, las maneras en las cuales se ha hecho y las implicaciones que esta consolidación tenga para la democracia en Colombia y el mantenimiento del Estado Social de Derecho.



Un estudio de los resultados electorales realizado por la investigadora Claudia López con base en los resultados electorales del 2002, presenta situaciones particularmente atípicas en departamentos como el Magdalena – caso más representativo – pero también en Córdoba, Antioquia, Sucre, Cesar, Santander, Norte de Santander⁹. La ampliación y la comparación con resultados electorales anteriores nos permite determinar a partir de los cambios ocurridos en el panorama electoral, de los hechos violentos que consolidaron el poder paramilitar en las regiones tales como desplazamientos, masacres y homicidios selectivos, así como la presencia de cultivos ilícitos y redes de narcotráfico, negocios y mafias como el Chance, el cultivo de palma y los proyectos productivos asociados a la inversión de los sectores de las AUC.

Se han conocido tangencialmente trabajos que apuntan a indagar sobre la presencia territorial cruzando la variable de violencia política, presencia armada, homicidios y crímenes cometidos por paramilitares (según fuentes oficiales como la Vicepresidencia de la república y su observatorio para los Derechos Humanos), pero no se ha realizado una investigación conciente sobre la trayectoria de estos movimientos y partidos políticos que aparecen en las regiones, presentando un comportamiento atípico en los resultados electorales obtenidos, las alianzas y las coaliciones variables que pueden dar luces sobre la consolidación política y la cooptación de la institucionalidad pública por parte del paramilitarismo.

El acercamiento comparativo se realizará desde 1997, pasando por las elecciones territoriales y nacionales a senado y cámara de representantes hasta el 2003.

Las Elecciones de 1997¹⁰

Posterior a los resultados electorales de 1997, el Departamento de Estado publica el 31 de enero de 1998 un informe sobre la situación de derechos humanos en el

⁹ Ver: López, Claudia. *Los héroes que no se han Reinsertado*; Revista Arkanos N° 11; Corporación Nuevo Arcoiris, Bogotá, 2005.

¹⁰ Todas las referencias a cifras y resultados electorales tienen como fuente los resultados procesados por la Registraduría Nacional.



país, en la cual asegura que las convivir han involucrado directamente a los ciudadanos en el conflicto armado, que estaban más allá del control de l estado.

Al mismo tiempo señaló los vínculos de los grupos paramilitares con élites regionales y locales de carácter político y económico, incluso con el narcotráfico.

Se advierte que una de las principales causas de los desplazamientos internos fue una política de reducción de población adoptada por grupos paramilitares para facilitar en control territorial. Entre 1995 y 1997, la cifra que cita el Departamento de Estado de Estados Unidos es de 525.000 ciudadanos. Cita textualmente el informe: “ los asesinatos perpetrados por los grupos paramilitares aumentaron de manera notoria, muchas veces con la complicidad de soldados o de unidades militares, o con el conocimiento y la aprobación tácita de algunos de los altos oficiales del ejército. Según fuentes dignas de credibilidad, durante los primeros nueve meses del año, los paramilitares cometieron el 69% de todos los asesinatos extrajudiciales de índole política”¹¹. 130 desapariciones forzosas fueron de autoría de los grupos paramilitares durante 1997.

Durante los comicios electorales, no fue posible adelantar elecciones en 33 municipios del país, por problemas de seguridad. Los resultados de las elecciones se distorsionaron en al menos un 15% de los municipios de l país. 2000 candidatos públicos retiraron su candidatura por amenazas de grupos armados como las AUC y las Farc¹².

Las AUC, mediante comunicados prohibieron la inscripción de candidatos considerados simpatizantes de la guerrilla, y manifestó que consideraba la abstención como un voto a favor de la guerrilla, y amenazó con tomar represalias. El Partido Revolucionario de los Trabajadores no pudo presentar una lista formal de candidatos en el departamento de Sucre, puesto que siete de los candidatos del partido fueron asesinados. Durante estas fechas, la sociedad civil también votó mayoritariamente el Mandato por la Paz. Se consideró que la alta votación

¹¹ *Informe sobre prácticas de derechos humanos, Colombia, 1997*; Departamento de Estado de EE.UU. Para publicación inmediata. 30 de enero de 1998. Tomado de: www.bogota.usembassy.gov

¹² *Misión de Solidaridad con la Democracia Colombiana, 1997*. Observaciones Electorales, Serie Américas, No. 12; Secretaría General Organización de los Estados Americanos; Washington, D.C., 1998



era una respuesta de la ciudadanía a la presión de los grupos armados, frente al mantenimiento de sus derechos civiles y políticos¹³.

Para las elecciones a Gobernador participaron los siguientes movimientos o partidos políticos:

Representando Coaliciones de partidos participaron 13 candidatos, de los cuales 6 resultaron electos. Los departamentos en los cuales se eligieron gobernadores de coaliciones fueron: Valle, Santander, Norte de Santander, Atlántico, Tolima y Bolívar, teniendo la votación más alta Miguel de Jesús Arenas en Santander, quien obtuvo un 72% de la votación.

Partido Conservador: presenta 12 candidatos, de los cuales resultaron electos tres, en el Guaviare, en Antioquia y en Boyacá, teniendo la mayor votación Hernando González en el Guaviare con 77% de los votos.

Movimiento educación, Trabajo y Casa: Presenta dos candidatos para el Amazonas y San Andrés, de los cuales ninguno resultó electo.

Movimiento Independiente Frente de Esp: Presentó un candidato a la Gobernación del Vaupés, Bernabé Silva Mecha, el cual fue electo con el 55% de los votos

Partido Liberal Colombiano: Presenta 39 candidatos, de los cuales 20 resultaron electos, en San Andrés, Arauca, Guajira, Putumayo, Quindío, Caldas, Risaralda, Sucre, Cundinamarca, Meta, Casanare, Vichada, Nariño, Amazonas, Cauca, Córdoba, Magdalena, Cesar y Caquetá.

Las votaciones más altas fueron las de Angel Villadiego en Córdoba con el 77% de los votos, y Henry Gomez Tabares con un 64%.

¹³ *Ibíd.*



Alianza Social Indígena: Presenta tres candidatos, de los cuales es elegido para el Guainía, Arnaldo José Rojas, quien resulta electo con un 25% de los votos.

Movimiento Nacional Colombia: Presenta tres candidatos. Resulta electo en el Huila con un 41 % de la votación, Jaime Bravo Motta.

Movimiento Civico Seriedad por Colombia: Presenta un candidato a la gobernación del Atlántico. No es elegido.

Movimiento M-19: Presenta un candidato a la gobernación de cundinamarca, quien no resulta electo.

Movimiento C4: Presenta un candidato a la gobernación de Sucre, quien no resulta electo.

El caso de las elecciones de 1997 y 1998, fue un caso particular, puesto que se esperaba una arremetida de violencia política en las regiones de conflicto, donde ya se hacía evidente la pugna armada por el control territorial. Sin embargo las elecciones de 1997 no presentaron situaciones atípicas de considerar, pero se comenzaban a divisar regiones y nuevos movimientos políticos que dieron sorpresas electorales. Si limitamos el análisis a las elecciones a congreso de la República, tanto en Senado como en Cámara, las mayorías se reparten entre el partido liberal y el conservador. No obstante, en la cámara de representantes, movimientos nuevos, con escasa trayectoria, comienzan a demostrar una fuerte presencia territorial, si no nacional. No es extraño, entonces que a partir de la consolidación de estos poderes territoriales – sumado a los índices nacionales de violencia política – los resultados de las pasadas elecciones a congreso de la república, reprodujeran la presencia territorial, y avanzaran en un proyecto político que tiende a ser nacional y unitario, fundamentado en la unión de estos

poderes territoriales. Las declaraciones de las AUC son claras al respecto: el poder a las regiones, donde se encuentra consolidado y hegemónico su proyecto político, económico y militar.

Dentro de los resultados electorales a congreso y a cámara, encontramos los siguientes partidos distintos al partido liberal y conservador:

partido o movimiento	Curules obtenidas Senado	Curules obtenidas a la cámara
nacional comunitario	7	4
fuerza productiva	4	
ASI	2	
movimiento defensa ciudadana	2	
nacional progresista	2	1
oxigeno liberal	2	
C4	1	
Colombia Mi pais	1	
conservatismo independiente	1	2
convergencia popular civica	1	2
Frente de Esperanza	1	1
Ganas*	1	
laicos por Colombia	1	
móv. 98*	1	
móv. nueva fuerza democrática	1	
popular colombiano	1	
reconstrucción	1	1
vamos por Colombia	1	
alternativa democratica		1

apertura liberal		1
integración regional		2
mov de participación popular		1
movimiento ciudadano		1
movimiento civico independiente		1
movimiento civico seriedad por colombia		1
movimiento humbertista		1
movimiento nueva fuerza democratica		2
nueva colombia		1

Los movimientos que presentan sorpresas electorales fueron el Movimiento nacional Comunitario, y el movimiento Nueva fuerza productiva. Sin embargo, la existencia de gran cantidad de partidos y movimientos pequeños que accedieron a curules del congreso de la república, representa un aspecto importante del panorama electoral nacional, que se hace más claro con las elecciones a alcaldías.

En las elecciones a alcaldes, las mayorías siguieron en la cabeza del partido liberal y del partido conservador. Si bien hay que reconocer que muchos de los avales de estos partidos grandes se otorgaron si un compromiso político claro con el partido que se representaba, no obstante el partido liberal obtuvo las grandes mayorías.

A partir de las elecciones a alcaldes, regiones como Antioquia, Córdoba y en general las de la costa atlántica colombiana presentaron algunos comportamientos atípicos y presenciaron el surgir de nuevos partidos y movimientos.

El movimiento C4 del congresista electo Jimmy Chamorro, obtuvo una alcaldía en la Guajira, zona eminentemente liberal.



El movimiento cívico independiente obtuvo 14 de alcaldías, centrando sus áreas de influencia en Cundinamarca, Santander, Bolívar, Casanare, Córdoba, Boyacá, Tolima y Chocó, siendo sus fortalezas Cundinamarca y Santander.

Convergencia Ciudadana, movimiento que nació de una disidencia de la ADM-19, liderado por Luis Alberto Gil, obtuvo solo dos alcaldías en Santander, y un escaño a la Asamblea departamental en la misma región.

El movimiento Fuerza Productiva obtuvo ocho alcaldías en Antioquia, consolidando una importante presencia electoral en la región. Sumado a esto, obtuvo tres curules a la Asamblea departamental en Antioquia, y una en el Cesar.

El Movimiento Nacional Comunitario obtuvo diez alcaldías en el país, siendo el Atlántico su fortín político. En elecciones a Asamblea Departamental obtuvo cinco escaños en el Atlántico, dos en Bolívar, uno en Caldas, uno en la Guajira, dos en Norte de Santander, uno en el Quindío y dos en Norte de Santander.

El movimiento Convergencia Popular Cívica obtuvo alcaldías en Caquetá, Nariño, Santander, Sucre, Boyacá, Caldas y Risaralda, sumando 11 alcaldías a nivel nacional. En Asamblea departamental, logró tres escaños en Sucre, uno en Santander y uno en Antioquia.

El Movimiento Integración Regional obtuvo seis alcaldías, siendo el fuerte, el departamento del Cesar.

El movimiento Nueva Fuerza Democrática obtuvo tres alcaldías en el Cesar, dos en el Atlántico, una en Magdalena y una en Risaralda. Obtuvo para Asamblea, dos diputados en el Atlántico, uno en Santander, uno en Sucre, uno en la Guajira y uno en el Quindío.



De acuerdo con las estadísticas, en la región Atlántica del país, el 17,3 % de las alcaldías estuvieron en manos de partidos pequeños, coaliciones o alianzas. En la región Occidente, fue el 28%, en la región centro Oriente el 21%, en la Región de la Orinoquia, en 24 %. Esto presenta un promedio nacional de alrededor de un 20%, mientras que en elecciones a Senado esto sólo representa un 2% y en elecciones a Cámara esta cifra fue de un 3%.

Elecciones 2002,2003

El 28 de octubre del año 2000, la BBC titula un artículo: Colombia, Elecciones a sangre y fuego. Al margen del contenido del artículo, comienzan a visibilizarse a nivel nacional situaciones de retiro o impedimento para la realización de los comicios electorales, tales como amenazas a la vida de los candidatos o presiones en distintas regiones – principalmente municipios y áreas rurales – para votar por determinado candidato, de la preferencia de grupos armados como las FARC, y los distintos grupos paramilitares que mostraban incidencia territorial¹⁴.

Algunos casos fueron bastante públicos, como el del ex alcalde de Aguachica, Luis Fernando Rincón, asesinado por paramilitares el 18 de agosto, cuando se postulaba por segunda vez al cargo. Al mismo tiempo, en 100 municipios del país, los alcaldes fueron amenazados, asesinados, u obligados a desplazarse por presiones de grupos armados. Según las estadísticas de la defensoría del pueblo, 6 congresistas fueron secuestrados por grupos paramilitares.

Sin embargo, y a pesar del clima, para estas elecciones se presentaron tres veces más candidatos que en las elecciones pasadas, lo cual en su momento fue

¹⁴ Ver: *Elecciones de sangre y fuego*; BBC News, Corresponsal Gloria Rey para Colombia. 28 de Octubre del 2000



interpretado como sensación de seguridad en la realización de elecciones, pero mostraba claramente un comportamiento electoral atípico que no fue estudiado. Organizaciones internacionales como Human Right Watch, hablan de que el conflicto armado se intensificó para el año 2000 y asegura que los departamentos más peligrosos son Santander, Antioquia, Meta y Bolívar. Para 1999 los paramilitares fueron responsables del 78% de las violaciones a los derechos humanos – según la Comisión Colombiana de Juristas – y los casos de

acompañamiento de la fuerza pública a los grupos paramilitares se mantuvo en una alta constante. El Gobierno nacional cita el caso de la relación entre la cuarta brigada de Medellín y las órdenes de Carlos Castaño – reconocido dirigente paramilitar de las AUC – . La sede en Bogotá de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos informó en 1999 que, a pesar de la existencia de informes creíbles similares, el Gobierno no actuó enérgicamente para cortar los vínculos y perseguir a los paramilitares. "Entre los elementos que indican la falta de voluntad de combatir con eficacia a los grupos paramilitares es de destacar que la ubicación de muchos de sus sitios de concentración y de entrenamiento es de conocimiento público tanto de los pobladores como de las autoridades," señalaba en su informe.

Las fuerzas de seguridad no detuvieron las incursiones de los paramilitares ni de la guerrilla en ciudades donde se mató frecuentemente a civiles. Sin embargo, los soldados persiguieron a la guerrilla cuando se informó del ataque. Por el contrario, aunque los paramilitares con frecuencia anunciaron públicamente y con bastante antelación sus planes de ataque, las autoridades no sólo no intervinieron para detener los asesinatos, sino que muy pocas veces persiguieron a las unidades paramilitares, ni siquiera cuando permanecieron en la región después de masacrar a civiles.

19 aspirantes a alcaldías fueron asesinados entre enero y octubre de ese año y 15 a los concejos municipales. A esto habría que sumarle los cinco alcaldes que han



renunciado a su cargo y los 25 que abandonaron sus respectivos municipios para despachar desde localidades cercanas.

Aunque no hay autoridades que tengan registros completos, por informaciones fragmentarias de diversas fuentes se sabe que no menos de 52 candidatos a alcaldías y concejos municipales renunciaron a sus aspiraciones por presión de grupos armados.¹⁵

Los asesinatos paramilitares fueron descarnados por su salvajismo. En enero, por ejemplo, se informó de que los paramilitares sacaron por la fuerza a 25 feligreses de una iglesia en Playón de Orozco, Magdalena, y los acribillaron a balazos. Esa misma semana, las autoridades registraron más de un centenar de asesinatos atribuidos a los paramilitares, que mutilaron a algunas de las víctimas y arrojaron sus cuerpos a ríos para destruir las pruebas.

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias transmitió al Gobierno de Colombia 50 nuevos casos de desapariciones ocurridas en 1998. Tuvieron lugar principalmente en el noroeste de Colombia y el departamento de Santander. La mayoría de los secuestros y detenciones que resultaron en desapariciones fueron llevados a cabo por grupos paramilitares. En unos cuantos casos, se responsabilizó al Ejército de la detención.

En el cuadro siguiente se muestran algunos casos, que fueron visibles en el período preelectoral en los departamentos más críticos¹⁶:

¹⁵ Fuente: Observatorio de Derechos Humanos, Vicepresidencia de la República.

¹⁶ Estos casos se registraron en periódicos regionales de manera tangencial. La referencia al caso como tal es tomada del sistema de información sobre violencia política – SIVEL – de la revista Noche y Niebla del CINEP.

Antioquia:

FECHA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	HECHO
06/01/00	Chigorodó	Antioquia	Paramilitares bajo la etiqueta de ACCU ejecutaron a VÍCTOR ZENÓN GONZÁLEZ MURILLO, Concejal liberal de este municipio, luego de ingresar en horas de la madrugada a su residencia ubicada en el barrio El Bosque. El Alcalde de Chigorodó confirmó la existencia de un panfleto de las ACCU en el que se atribuyen el hecho: “El comunicado aduce a malos manejos en la venta y transferencia de lotes en el barrio de invasión El Bosque, como también, dice el comunicado, a otros hechos de corrupción que no vale la pena describir.”
12/01/00	Tarso	Antioquia	paramilitares bajo la etiqueta de AUC ejecutaron a LUIS EMILIO CORRALES LONDOÑO, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Cedrón.
08/09/00	Medellín	Antioquia	paramilitares bajo la etiqueta de AUC ejecutaron de varios impactos de arma de fuego, al candidato a la Asamblea de Antioquia por la Unión Patriótica (UP), HELIODORO DURANGO HERNÁNDEZ, en un establecimiento público del barrio Carlos E. Restrepo. Los autores del crimen se movilizaban en una motocicleta color azul, placa CBR-650

12/09/00	Vegachí	Antioquia	paramilitares ejecutaron a DELIO DE JESUS GRANADA, candidato al Concejo, y a LIBARDO TOBÓN MEJÍA, 69 años de edad, luego de sacarlos de sus viviendas en el corregimiento El Tigre. Delio de Jesús, de 51 años de edad, candidato por el movimiento Fuerza Progresista del Coraje, recibió ocho impactos de bala, mientras que la otra víctima, presentaba 14.
----------	---------	-----------	--

Cauca:

FECHA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	HECHO
11/10/00	Buenos Aires	Cauca	paramilitares bajo la etiqueta de AUC ejecutaron a JACOBO SANDOUNIK y a LIBIA MONTOYA GUAINAS, candidatos al concejo de Suárez (Cauca), de varios impactos de arma de fuego, arrojando sus cuerpos al río Cauca. Sus cadáveres fueron hallados en el sitio Paso de la Balsa. Las víctimas se encontraban desaparecidas desde el pasado 8 de octubre, cuando adelantaban reuniones políticas con las comunidades indígenas.

Cesar

FECHA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	HECHO
18/01/00	Codazzi	Cesar	paramilitares ejecutaron a WILLIAM ENRIQUE RÍOS VILLAZÓN, EDINSON DE JESÚS GALVIS, EDGAR ENRIQUE YANCE, CIRO ALFONSO GUERRERO y ÁNGEL MARÍA OSPINA, y desaparecieron a diez más, durante un retén realizado hacia las 12:30 am. en la carretera Troncal de Oriente, a la altura de la finca La Esmeralda, jurisdicción del corregimiento Casacar. Los paramilitares permanecieron cerca de dos horas en el lugar, donde hicieron bajar a los conductores y pasajeros de los vehículos, separando a las cinco personas que
31/08/00	Aguachica	Cesar	paramilitares bajo la etiqueta de AUC ejecutaron al comerciante y candidato al Concejo de Aguachica por el Partido Conservador JOSÉ A. ANGARITA NARVÁEZ. Los hechos ocurrieron a las 8:30 p.m. en la carrera 21 con calle 4.

31/08/00	El Copey	Cesar	<p>paramilitares ejecutaron a ROMÁN ANTONIO SANMARTÍN MELÉNDEZ y desaparecieron a ALFREDO MANUEL ARAÚJO RODRÍGUEZ. El hecho sucedió luego de que el grupo paramilitar irrumpiera a la 1:00 am. en la vivienda de Román Antonio y tras sacarlo de la misma junto con Alfredo Manuel, quien es técnico veterinario, se los llevaron consigo. Horas después fue encontrado con un tiro en la cabeza Román, quien era el presidente de la Comisión Arbitral de El Copey y candidato al concejo del municipio por el partido liberal, desconociéndose el paradero de Alfredo.</p>
29/05/00	El Copey	Cesar	<p>paramilitares ejecutaron en la vereda Alejandria, en la vía que de El Copey conduce al municipio de Algarrobo (Magdalena), a JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ y a DONALDO SAN MARTÍN MELÉNDEZ. Julio César era el Alcalde de El Copey.</p>
06/06/00	El Paso	Cesar	<p>paramilitares ejecutaron al Alcalde de Becerril, LISÍMACO MACHADO ARCE, con varios impactos de arma de fuego. Paramilitares bajo la etiqueta de AUC habían desaparecido un día antes a la víctima, en momentos en que se movilizaba en la vía que de Bosconia conduce a Valledupar, cuando regresaba de visitar una finca de su propiedad. Su cadáver fue hallado en zona rural de este municipio</p>

Choco

FECHA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	HECHO
27/11/00	Unguía	Choco	paramilitares ejecutaron en el sitio Paloblanco a RIGOBERTO CASTRO MORA, Alcalde de Unguía. El hecho sucedió luego de que el grupo paramilitar interceptara en aguas del río Atrato al burgomaestre quien se dirigía de Unguía hacia el municipio de Turbo (Antioquia).

Cundinamarca

FECHA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	HECHO
15/09/00	Viotá	Cundinamarca	paramilitares bajo la etiqueta de AUC ejecutaron de varios impactos de bala en la cabeza, a RUTBER JOSÉ NAVARRO GRISALES, alcalde por el Partido Liberal, hacia las 8:00 am., en la calle 17 No. 10-31. Según la fuente, “A él le preocupaba que las amenazas, al parecer, provenían de grupos de derecha. Lo cual fue ratificado, al encontrar al lado del cadáver de Navarro un calendario alusivo a las Autodefensas Unidas de Colombia”.

Magdalena:

FECHA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	HECHO
23/12/00	Plato	Magdalena	paramilitares ejecutaron a ORLANDO SANDOVAL QUINTANA, alcalde de Tenerife, cuyo cadáver maniatado y con dos impactos de bala en la cabeza fue hallado al día siguiente. Los paramilitares estaban comandados por alias “Codazzi”, y se movilizaban encapuchados y fuertemente armados.

Meta:

FECHA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	HECHO
21/04/00	Puerto Gaitán	Meta	paramilitares bajo la etiqueta de AUC desaparecieron a NELSON RESTREPO, líder cívico, Los paramilitares Wilson Quintero, conocido como “Quintanilla” o “Dago” y otro conocido con el alias “Sida”, quienes tienen presencia y control permanente en el casco urbano y el área rural de este municipio y son comandados por “Don Guillermo”, irrumpieron hacia las 7:00 p.m. en el taller de mecánica, propiedad de Nelson, y tras obligarlo a abordar un vehículo, lo llevaron por la

			<p>fuerza con rumbo desconocido, sin saberse desde entonces su paradero y estado. Nelson, quien residía en el municipio desde hacía 20 años, era un reconocido líder cívico, mecánico de motores fuera de borda, y en los últimos tiempos se venía desempeñando como Veedor Ciudadano por solicitud de la comunidad. Agrega la denuncia que: Extraoficialmente se conoce que el Alcalde Municipal tiene nexos directos con los paramilitares que actúan bajo la etiqueta de AUC, con sede en el casco urbano; ni el alcalde ni ninguna autoridad civil ni de policía han denunciado los atropellos que cometen los grupos paramilitares contra campesinos que vienen de la zona rural del municipio”.</p>
--	--	--	---

Santander:

FECHA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	HECHO
-------	-----------	--------------	-------

21/07/00	Barrancabermeja	Santander	<p>Paramilitares ejecutaron a JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ CÓRDOBA, asesor jurídico de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, e hirieron a una persona más. Los autores de este crimen se movilizaban en una motocicleta marca Yamaha RX-115 de color vinotinto. El hecho se presentó hacia las 8:30 p.m., en el interior del billar San Tropel, ubicado en la carrera 33 No 44-10 del barrio Tres Unidos. Los victimarios llegaron al establecimiento y luego de ubicar al abogado dispararon indiscriminadamente y finalmente lo remataron. La víctima, además de abogado, era economista, dirigente sindical universitario, dirigente popular -político del Partido Comunista Colombiano, PCC. De igual forma se desempeñó como secretario del Concejo Municipal de Sabana de Torres, Director de Valorización de Barrancabermeja y ex Candidato al Concejo de la ciudad</p>
----------	-----------------	-----------	--

Sucre:

FECHA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	HECHO
22/09/00	San Onofre	Sucre	<p>paramilitares bajo la etiqueta de AUC que se movilizaban en una motocicleta, ejecutaron a LUBIÁN PÉREZ VILLADA y a</p>

			otra persona no identificada. Lubián era candidato a la alcaldía de San Onofre por el Partido Liberal.
--	--	--	--

Tolima:

FECHA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	HECHO
09/09/00	San Luis	Tolima	paramilitares bajo la etiqueta de AUC ejecutaron al periodista, director del periódico mensual Tangente, editor del diario Usocoello al Día, desmovilizado del M-19 y candidato al Concejo, CARLOS JOSÉ RESTREPO ROCHA, de 44 años de edad. Según la fuente, “El periodista se encontraba en la vereda Guadalajara, donde más de 35 trabajadores de Usocoello realizaban labores de parcelación en la bocatoma del río Cucuana, cuando un grupo de 20 paramilitares que se identificaron como AUC llegaron al lugar y se lo llevaron, para luego asesinarlo de 11 disparos y dejar su cadáver en la vereda Caimetal”.

17/05/00	Ataco	Tolima	paramilitares con el rostro cubierto con capuchas blancas, ejecutaron al alcalde de este municipio, NEVIO FERNANDO SERNA DÍAZ, en la vía que comunica hacia la inspección de policía Balsillas. La víctima viajaba en compañía de dos funcionarios de la alcaldía en un vehículo, cuando fueron interceptados por guerrilleros, quienes después de varios minutos dejaron que siguieran su camino hacia la cabecera municipal. Posteriormente el vehículo fue detenido en la vía por dos paramilitares, quienes insultaron a los ocupantes “por tener tratos con la guerrilla”. Los paramilitares dejaron que se fueran los dos funcionarios y procedieron a amarrar al alcalde y ejecutarlo de dos disparos, uno en la frente y otro en el cuello, quemaron el vehículo y huyeron del lugar
----------	-------	--------	--

Estos casos, los cuales observados de manera aislada no inducen una hipótesis distinta a las hipótesis ya señaladas en investigaciones anteriores, vistas en el cruce con otras variables, sí tienden a mostrar un comportamiento que relaciona la violencia paramilitar en las regiones con fenómenos electorales, a partir de la comparación y el seguimiento en el tiempo y el espacio.

Los Movimientos emergentes en las elecciones de 1997, se comportaron de la siguiente manera durante las elecciones del 2000 - 2002:

Convergencia Ciudadana: Obtuvo 186 votos en el Amazonas, lo cual le representó un 2%



Nueva Fuerza Democrática: Obtuvo un escaño

Movimiento Nueva Fuerza Progresista: Obtuvo un escaño

Movimiento Convergencia Ciudadana: Obtuvo un escaño

Movimiento Convergencia Popular Cívica: Obtuvo un escaño

Movimiento Defensa Ciudadana (se transformó en Movimiento Dejen Jugar al Moreno): obtuvo un escaño

Movimiento ciudadano: Obtuvo un escaño

Movimiento Cívico Independiente: Obtuvo un escaño

El Movimiento de Integración Regional en coalición con el movimiento ALAS, tuvo sorprendentemente altísimas votaciones municipales con una concentración electoral al congreso bastante alta, casi del 60% sumando la dupla de la lista del partido liberal y el Movimiento.

El Movimiento Nacional Progresista en Coalición con el Partido Liberal, obtuvo Muchos de los movimientos desaparecieron, pero surgieron unos nuevos, con una presencia territorial sorprendente, como el Movimiento Unido, MIPOL, Cambio Radical.

Uno de los casos más sorprendentes es el desarrollo de Convergencia Popular cívica en Antioquia, cuando no se corresponde con el área de influencia.

Elecciones 2006

El año 2006 presencié dos tipos de comicios de características diferentes: elecciones legislativas y elecciones presidenciales; la primera funcionó como antesala de la segunda. A partir de la visibilización de una serie de congresistas señalados de vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico, la opinión pública esperaba los resultados para lograr medir el nivel de ingerencia, el cual hasta el momento es difuso.



La dinámica del conflicto armado, hasta el momento considerado un fenómeno lejano del “centro político” o marginal respecto a la contienda política, se convierte en una variable cada vez más importante en la explicación del comportamiento reciente de los actores políticos y su relación con los electores.

No es casual que la reconfiguración del mapa político y electoral de las dos últimas décadas haya coincidido con los intentos fallidos o parcialmente exitosos de negociaciones de paz con las guerrillas, el escalamiento de la confrontación militar y la extensión del fenómeno paramilitar. Más reciente y particularmente, las elecciones locales del 2003 y las parlamentarias y presidenciales del 2006 acontecieron en el marco del vistoso proceso de negociación y desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia.¹⁷

Las investigaciones de Mauricio Romero¹⁸ han insistido en señalar tal relación. Sus evidencias apuntan a señalar que el fenómeno paramilitar se configuró como una fuerza militar dirigida a contrarrestar las reformas derivadas de los procesos de negociación política con la insurgencia y a imponer cambios en sentido contrario. Las viejas formas del clientelismo local fueron progresivamente cooptadas o sustituidas por el proselitismo armado que expresó la configuración de nuevas alianzas políticas entre elites y empresarios legales e ilegales. La cooptación de poder local fue el mecanismo mediante el cual la derecha paramilitar pretendió contener los signos democratizadores de la descentralización política y el argumento preferido para enfrentar la expansión de las guerrillas.

¹⁷ Sanguino, Antonio y Bonilla, Laura. *Paramilitares y Elecciones*; Revista Foro. (en publicación)

¹⁸ Romero, Mauricio. *Paramilitares y Autodefensas. 1982 – 2003*. Editorial Planeta. Colombia, 2003



Los resultados electorales de los comicios legislativos generaron resultados encontrados: por una parte, los medios de comunicación registraron – tal vez apresuradamente – la derrota del paramilitarismo por las urnas. Esto tal vez acompañado de las cifras de reducción de homicidios y acciones armadas de los grupos a partir de la desmovilización, contribuyó a crear el panorama que se expresó después del 12 de marzo del 2006. Sin embargo el análisis se fundamentó en premisas frágiles.

La primera de ellas fue separar los cambios en el sistema electoral (reforma política 2003) de los resultados electorales; de esta manera, el conteo de candidatos señalados que aspiraron a ser reelegidos, presenta una disminución importante. Lo que no es tan fácil de percibir es que con la reforma política el énfasis del análisis recae sobre los partidos políticos, que para el caso del nuevo congreso 2006 – 2010, tienen un énfasis distinto.

Desde esta óptica, un 70% de los partidos políticos presentes en el congreso actual tienen algún congresista acusado de vinculaciones con grupos paramilitares, o con votaciones atípicas en las regiones.

Otro punto que se tomó en el análisis fue la reducción de los indicadores de violencia política en las regiones. No obstante, la baja en los indicadores no implica la ausencia de la presión armada o la disminución del control hegemónico local por medio de las armas. Es apenas lógico suponer que tras sucesivos períodos de eliminación sistemática del contrario o de imponer el terror sobre los territorios y sus pobladores, se consolide un dominio de uno u otro actor armado que gracias a la estabilización de su incidencia deba recurrir cada vez menos al uso de la violencia.

A pesar de ser tan recientes los resultados electorales, los consolidados a la fecha arrojan algunas conclusiones que pueden ser tomadas como hipótesis para los análisis de coyuntura pertinentes.

La primera de ellas es la relación entre reforma política, fortalecimiento de partidos y tradición política electoral. En este sentido, los análisis que puedan realizarse parten de cruzar variables como la deserción de candidatos de partidos



como el Liberal, la incidencia de ésta en los resultados evidentes, las campañas realizadas, los imaginarios presentados a la opinión pública y la tradición política de los barones electorales que se ausentaron de las toldas del uno de los dos partidos tradicionales y fuertes, que anteriormente presentaba mayoría electoral en cualquier circunscripción, nacional o regional.

El segundo punto importante es la reelección de algunos congresistas con votaciones atípicas en regiones de influencia paramilitar. Jorge Luis Caballero y Salomón Saade fueron dos de los Congresistas desertores, con fuertes sospechas de vinculación y acuerdos con grupos paramilitares. Jorge Enrique Ramírez, Jorge Luis Feris, Miguel de Jesús Arenas, Carlos Barriga, conocidos barones electorales de diferentes regiones también se ausentaron de otros partidos, para integrar coaliciones que fueron elegidas en el congreso para los próximos cuatro años.

De estos, resultaron electos Carlos Barriga y Miguel de Jesús Arenas, ambos vinculados a un partido cuya votación en el congreso no es nada sorprendente, aunque atípica y extraña, si se hace la correlación entre los resultados electorales atípicos en las elecciones del 2002 y 2003, y los escándalos de financiación, corrupción y alianzas con grupos paramilitares.

Aunque Rocio Arias, Eleonora Pineda y Muriel Benito, figuras públicas cercanas a los jefes paramilitares se quemaron, Rocío Arias incrementó su votación en cinco mil votos, razón por la cual no puede desaparecer del panorama político nacional

En Sucre se reeligieron los tres senadores señalados: Alvaro García Romero, Jairo Merlano y Miguel de la Espriella..

En César fue reelegido Mauricio Pimiento por el partido de la U y Alvaro Araujo encabezó un partido de coalición como Alas – Equipo Colombia, que también eligió a Jorge Ballesteros en la Guajira con alianzas en las Cámaras. Partidos que se consolidaron con votaciones altas a pesar de las expulsiones del partido de la



U y Cambio Radical fueron Colombia Viva y Colombia Democrática. Dieb Maloof fue reelegido por Colombia Viva en el Atlántico, y en el Magdalena, Luis Eduardo

Vives por Convergencia Ciudadana al Senado; Karelly Lara Vence también obtuvo una curul por Moral, el partido que inscribió en los comicios pasados a

Mario Uribe. El Gato, Héctor Julio Alfonso López, es la mayor votación a Cámara del país y con la cual garantizó una curul más para uno de los partidos más polémicos: Apertura Liberal.



A modo de Conclusiones

El debate es apenas incipiente, y tiene la profunda necesidad de superar el contraste entre juicios de valor y columnas de opinión. Es necesario también además de señalar un problema humanitario específico, abordar las condiciones y características estructurales que alumbran cualquier análisis de coyuntura.

El copamiento territorial y la captación de la institucionalidad pública por estos grupos aconteció a sangre y fuego. Según cifras oficiales, entre 1993 y 1994 fueron asesinados 127 políticos del nivel nacional¹⁹, contando únicamente personas elegidas por voto popular y excluyendo la cantidad aún no revelada de líderes sociales y comunitarios en los municipios y regiones. Esta cifra se dispara a 176 en 1997 y posteriormente desciende levemente a 135 para el 2001 -2002, y en 50 homicidios para el año 2006. El comportamiento de las cifras oficiales revela un accionar “campana” de los homicidios a alcaldes, gobernadores, congresistas, concejales y candidatos a corporaciones públicas modificando sustancialmente el panorama político en municipios y departamentos.

El problema de los comportamientos campana es el retorno a niveles abismales de la violencia política, al monopolio de la relación ciudadanía - estado por la fragmentación del canal de los partidos políticos, o por la ausencia de un sistema de partidos que organice el multipartidismo moderado al que se logró llegar con la reforma política.

Cualquier sociedad con un régimen democrático nacional debe garantizar una corresponsabilidad en los regímenes locales y regionales. La estabilidad y la gobernabilidad no pueden seguir fundándose en la alianza nefasta legalidad - ilegalidad que ha sido la constante en varios territorios nacionales durante varios años.

¹⁹ Fuente: Observatorio de derechos humanos; Vicepresidencia de la República.